

## **REPÚBLICA DE COLOMBIA**



### **RAMA JUDICIAL**

### **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**Medellín, veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral promovido por WILSON ALBERTO ALZATE en contra del CONSORCIO CCC ITUANGO, conformado por las sociedades CAMARGO CORREA INFRA LTDA SUCURSAL COLOMBIA, CONINSA RAMON H. S.A. y CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. (Radicado **05001-31-05-021-2021-00242-01**).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de CAMARGO CORREA INFRA LTDA SUCURSAL COLOMBIA, CONINSA RAMON H. S.A., y CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., al abogado Maicol Andrés Rubio Rojas, con tarjeta profesional No. 193.289 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

### **ANTECEDENTES**

El demandante pretende, previo a las declaraciones que entre las partes se celebró un contrato escrito de trabajo el cual se inició el 1° de abril de 2013 y finalizó el 29 de julio de 2020, que las empresas codemandadas y el consorcio conformado, al hacer firmar un nuevo contrato de trabajo, tal proceder debe ser declarado nulo o sin eficacia y por tanto tener como ilegal e injusto la

terminación, y como consecuencia de ello que se le reconozca la indemnización correspondiente; solicita también el reconocimiento y pago de las primas de alimentación, prima de vivienda, prima de lejanía, prima de orden público o riesgo y prima de calor o de clima; a la reliquidación o pago del reajuste de las cesantías, vacaciones, primas de servicio legal, horas extras, diurnas, nocturnas, festivas y dominicales, subsidios de transporte y demás conceptos que sean de recibo ultra y extra petita que correspondan al trabajador por sus servicios; al pago de la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del C.S. del T., y a la indexación subsidiariamente de los conceptos de recibo; y las costas.

Como hechos relevantes de sus súplicas narró que mediante contrato verbal a término indefinido, se vinculó al servicio del Consorcio CCC Ituango, conformado por las sociedades descritas y demandadas de manera conjunta, solidaria o separadamente; la vinculación inició el 1° de abril de 2013, laborando de manera ininterrumpida hasta el 29 de julio de 2020, desempeñando el cargo de conductor de volqueta bajo la continuada subordinación de las codemandadas; su último salario era de \$935.478, pagados por catorcenas; el horario de trabajo era de 6:00 A:M hasta las 6:00 P:M, cambiando cada catorcena, pues cada catorcena salía a descanso por 7 días, laborando de lunes a domingo, días de fiesta, además de tiempo extra diurno y nocturno, pues eran 5 horas diarias extras; las codemandadas tenían pactado con los trabajadores, incluyéndolo a él, como prestaciones adicionales a las legales, las primas de clima, alimentación, alto riesgo u orden público, de lejanía y de campo, sin que estas le hayan sido cubiertas por las codemandadas ni tenidas en cuenta para la liquidación definitiva; el 30 de enero de 2019 fueron llamados todos los trabajadores a efectuarles las liquidaciones de sus contratos de trabajo y firmar unos nuevos, sin consentimiento de ellos, pues la empresa los obligó a cambiar el contrato de la adición y a perder las indemnizaciones de todo el tiempo laborado, para hacerle otro contrato con cláusulas ineficaces; una vez le hicieron firmar el contrato a los pocos días le indicaron que no iba a ser renovado; mediante comunicación el consorcio dio por terminado el contrato de trabajo el 23 de julio de 2019, sin mediar justa causa y sin reconocer la debida indemnización a la que tenía derecho; estuvo afiliado a la seguridad social durante todo el

tiempo de servicios a la EPS MEDIMAS y en pensiones COLPENSIONES; el 22 de octubre de 2020 efectuó reclamación escrita por los derechos y conceptos que mediante esta acción reclama.

CONSTURCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A., hoy CAMARGO CORREA INFRA LTDA SUCURSAL COLOMBIA, CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. y CONINSA RAMON H S.A., dieron respuesta de manera conjunta al libelo, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. De los hechos adujeron como ciertos el del cargo ocupado, el horario de trabajo, la vinculación al Sistema de Seguridad Social y la reclamación presentada. Negó todos los demás, destacando que la relación inicial fue mediante un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, el que luego fue modificado a contrato por porcentaje de obra al que se le hicieron varias adiciones y luego es nuevamente modificado a contrato de trabajo inferior a un año con nuevas adiciones, terminándose la relación laboral el 16 de agosto de 2020 por renuncia voluntaria del trabajador. Propuso como excepciones las que denominó inexistencia de la obligación, pago y prescripción.

El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 4 de mayo de 2022, absolvió a CCC ITUANGO, CAMARGO CORREA INFRA CONSTRUCCIONES S.A., SUCURSAL COLOMBIA, CONINSA RAMON H S.A. y CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A de las pretensiones formuladas en su contra por el señor WILSON ALBERTO ALZATE, a quien le impuso las costas, fijándole como agencias en derecho la suma de \$100.000 en favor de las demandadas.

En aplicación del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala conoce del proceso en el grado de la consulta.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

## CONSIDERACIONES

En esta instancia no existe discusión respecto a que entre las partes se celebró un contrato de trabajo a término fijo que inició el 1° de abril del año 2013, el cual fue adicionado y modificado en su modalidad en varias oportunidades y que terminó el 16 de agosto de 2020. Tampoco se discute que el cargo desempeñado por el actor era el de conductor de volqueta doble troque, y que el último salario devengado fue de \$1.701.000 mensuales.

Teniendo en cuenta lo anterior, los problemas jurídicos que compete a esta Sala de Decisión resolver consisten en establecer, con base en lo decidido en la audiencia de fijación del litigio, si son nulas las cláusulas mediante las cuales se hicieron modificaciones en la modalidad del contrato de trabajo que unió a las partes y, consecuencialmente, si hay lugar a declarar la terminación sin justa causa del mismo con el consecuente pago de la indemnización por despido injusto, así como el de determinar si hay lugar al reconocimiento de las primas de alimentación, alojamiento, campo, lejanía, de orden público o de riesgo y de calor o clima y, en consecuencia, analizar los efectos legales de ello. De igual manera, analizar la viabilidad de la sanción moratoria contenida en el artículo 65 del C.S. del T.

Para dar inicio al asunto de debate, debe tenerse en cuenta que las partes suscribieron el 1° de abril de 2013 un contrato de trabajo a término definido inferior a un año, con vencimiento el 29 de julio de la misma anualidad, el cual tenía como obligación del trabajador, entre otras, las de “...a) *A incorporar su capacidad normal de trabajo en forma exclusiva en el desempeño de sus funciones y actividades propias del oficio inicial de Conductor volqueta doblетроque en la obra PROYECTO HIDROELECTRICO ITUANGO, y en las labores anexas, similares o complementarias del mismo, de acuerdo con los reglamentos, órdenes e instrucciones que reciba de alguno de los representantes de “El Consorcio”, observando la diligencia, el cuidado y responsabilidad necesarias en la ejecución de las actividades asignadas, b)...*”, contrato este que tuvo varias adiciones, siendo a partir del 25 de julio de 2014, un contrato a término fijo con vigencia de un año. Luego, previo aviso de vencimiento del contrato a término fijo, se cambió mediante cláusula

modificatoria la modalidad de contrato de trabajo a término fijo inferior a un año por contrato a porcentaje de obra con vigencia a partir del 25 de julio de 2015, porcentaje que inicialmente fue establecido ***“...hasta la ejecución del 39.44% de avance de construcción de las obras Proyecto Hidroeléctrico Ituango, contratadas por el CONSORCIO CCC ITUANGO con EPM...”***, sin que se haya realizado alguna otra modificación frente a la labor desempeñada y el salario recibido (negrillas originales).

Esta nueva modalidad de contrato tuvo varias adiciones dependiendo de la ejecución del porcentaje de obra, siendo la última de ellas la suscrita el 15 de septiembre de 2018, en la que se estableció que ***“...se amplía hasta la ejecución del 96% de la construcción de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, contratadas por el Consorcio CCC Ituango con EPM incluyendo obras extras (AMB), según el avance físico”*** (negrillas originales).

Mediante documento suscrito el 30 de octubre de 2018, las partes acordaron una nueva cláusula modificatoria al contrato pactado entre ellos, en el sentido de cambiar la modalidad del contrato de porcentaje de obra a término fijo inferior a un año por 30 días a partir de tal data, conservando tanto las labores a desempeñar como el salario devengado, y que fue preavisado de manera debida.

En enero 31 de 2019, las partes acuerdan un nuevo contrato mediante la modalidad a término fijo inferior a un año con vencimiento el 30 de abril de igual anualidad, en el que se le fijaron las mismas obligaciones al señor Wilson Alberto Álzate que en el contrato primigenio, y fijando como salario a partir de tal fecha la suma de \$1.604.500 mensuales, contrato este que si bien le era notificado al trabajador el aviso de la terminación del mismo anterior a cada periodo de vencimiento, igualmente se adicionó hasta la firma de una nueva cláusula modificatoria del 30 de septiembre de 2019, en la que se cambia de modalidad de contrato de término fijo inferior a un año por contrato a porcentaje de obra a partir del 1° de octubre de 2019, estableciendo en dicho documento que era ***“...hasta el 41% de ejecución del contrato de las actividades de estabilización del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, contratadas por el Consorcio CCC Ituango con EPM y acordadas en el marco de la AMB36...”***,

conservando las mismas funciones y salario, modalidad esta que tuvo varias adiciones hasta la suscrita el 1° de agosto de 2020, cuando se alcanzara una ejecución de este contrato hasta el 83% del “*...avance recalculado de las actividades de estabilización del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, contratadas por el Consorcio CCC Ituango con EPM y según el plazo y condiciones finalmente acordados en el marco de la AMB38, que lo amplía hasta el 31 de diciembre de 2020*”, conservando las demás condiciones (negrillas originales), el que se mantuvo hasta el 16 de agosto de 2020 por renuncia del demandante.

Bajo estas condiciones, debe tenerse en cuenta que el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo establece los requisitos para la existencia de un contrato de trabajo a término fijo, indicando que este debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pacto este que define la terminación del mismo por la expiración del tiempo pactado.

Así mismo, el artículo 45 del mismo compendio establece que la duración de un contrato igualmente puede hacerse, entre otras, por tiempo determinado o para la realización de una obra o labor determinada, teniendo claro que su falta de precisión conlleva a entender celebrado a término indefinido (SL2600-2018). Debe señalarse que la vigencia de esta modalidad de contrato no depende de la voluntad de empleador, sino que corresponde a la labor que fue encomendada, teniendo claro que la finalización del contrato se puede determinar con base en la culminación de la obra o labor contratada.

Así las cosas, resulta claro que la vinculación que le realizó en un principio el Consorcio CCC Ituango al señor Wilson Alberto Álvarez, lo fue mediante un contrato a término fijo inferior a un año, y que si bien a lo largo de dicha relación se presentaron algunas modificaciones al mismo adelantadas de manera escrita y firmadas a voluntad por el trabajador, pues no se avizora que se haya ejercido sobre este alguna fuerza o constreñimiento con el fin de que las suscribiera, ellas obedecieron a la necesidad del servicio por parte del empleador frente a las obligaciones que este había contratado para el desarrollo del proyecto Hidroeléctrico Hidroituango, quedando claro que lo que delimitaba la relación laboral era la naturaleza del servicio prestado y la ejecución progresiva de tal obra.

No desconoce esta Sala de Decisión que las modificaciones frente a la duración o modalidad de tipo de contrato traía consigo incertidumbre para el actor, pero debe indicarse que las finalidades de los contratos firmados estaban sujetos al adelantamiento o ejecución del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, pues así quedó claro de las diferentes probanzas obrantes en el plenario, sin que se pueda pasar por alto, teniendo en cuenta para ello las máximas de la experiencia, que en este tipo de obras no se puede conocer con certeza en muchas de las veces la fecha de terminación exacta de determinada actividad o ejecución de obra, en tanto dependen de las condiciones atmosféricas o climáticas o de otras tantas para poderlas realizar, quedando completamente al arbitrio su finalización, por lo que resulta completamente entendible la manera en que se desarrolló la contratación del accionante, evidenciando que la duración convenida no estuvo ligada a una decisión caprichosa de quien fungió como empleador, sino que en efecto correspondió a la esencia del servicio prestado de la mano con la evolución de la construcción, desatando razonablemente que se echó mano de las adiciones y modificaciones de la relación laboral, en virtud a que de ese modo se garantizaría que el convenio con el trabajador duraría tanto tiempo cuanto se requiera su labor dentro de la obra, considerando igualmente que las modificaciones derivaron del mutuo acuerdo entre las partes, por cuanto no se avizoran vicios en el consentimiento que deriven en la declaratoria de nulidad o ineficacia, a más de que durante la relación contractual se conservaron las labores para las cuales fue vinculado el demandante, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que disfrutaba, independiente de la modalidad contractual que se suscribiera.

Resulta del caso agregar frente a las diferentes modalidades de contratos firmados que existe evidencia de los preavisos de finalización en la debida oportunidad legal cuando estos eran suscritos a término fijo y, en cuanto a los de ejecución por porcentaje de obra o labor, si bien no aparece alguna prueba que se llegó al límite establecido en los mismos, esta era una carga que estaba en cabeza del actor, pues no puede perderse de vista que era éste quien debía demostrar tal circunstancia si pretendía hacer valer algún derecho por incumplimiento de dichos contratos.

Ahora bien, obra en el expediente, sin anotación de recibido por el empleador, la comunicación fechada el 10 de agosto de 2020, mediante la cual el demandante presenta su renuncia ante el Consorcio CCC Ituango, indicando textualmente lo siguiente:

*“Mediante el presente yo Wilson Alberto Álzate identificado con cedula Nro. 71.187.690 de Puerto Berrio, código 1932422, perteneciente al Consorcio del CCC presento mi renuncia a partir de la fecha”.*

A su vez, aparece como prueba en el plenario, la respuesta dada a dicha comunicación por el Consorcio CCC Ituango al accionante, con fecha del 16 del mismo mes y año, donde le indican:

*“Nos permitimos informar que de acuerdo a su carta de renuncia presentada el 16 de agosto de 2020, esta ha sido aceptada a partir del día 16 de agosto de 2020”.*

Siendo así, resulta claro que la relación laboral suscrita entre las partes fue terminada por el señor Wilson Alberto Álzate, de donde se destaca a todas luces que ésta fue voluntaria y sin elementos que permitan deducir de ella alguna injerencia o presión por parte del empleador que le permitiera al accionante acceder a la indemnización tarifada de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no puede perderse de vista que la misma es un acto unilateral del trabajador por medio del cual dispone finalizar el contrato de trabajo. Puede ser o no justificado, pero si es importante que sea libre y voluntario. Si ésta es aceptada por el empleador se ha entendido que es una finalización por mutuo acuerdo. En sentencia del 9 de abril de 1986, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia (Exp. 69) dijo:

*“Renuncia es la dejación espontánea y libre de algún bien o derecho por parte de su titular. No puede pues ser un acto sugerido, inducido ni, mucho menos, provocado o compelido por persona distinta de su autor.*

*“Entonces, quien dimite de un empleo tiene pleno derecho para redactar a su albedrío la comunicación correspondiente, sin que su patrono pueda interferir la manifestación prístina del renunciante*



*porque, si así lo hace, ya no habrá espontaneidad esencial en cualquier dimisión sino una especie de orden que el empleador le imparte al subalterno suyo para que se retire del servicio” (M. P. Juan Hernández Saenz).*

Y el Consejo de Estado, sobre esta materia precisó:

*“La renuncia siempre va precedida de un motivo, expreso o no; no es esta circunstancia la que vicia la aceptación, sino el hecho de que ese motivo haya sido gestado por la entidad con el fin de quebrar el libre albedrío y provocar el retiro del empleado. No es suficiente, ni siquiera, la simple insinuación que haga el nominador de presentar la dimisión; es necesario que se evidencie un componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno del empleado fue invadido de tal manera que su capacidad de decisión se ve truncada, al punto que indefectiblemente se ve compelido a renunciar” (Enero 23 de 2003, Exp. 5182-01).*

Bajo tales condiciones, se considera que no se reúnen los elementos para dar cabida a la indemnización suplicada, en el entendido principalmente que la relación terminó por renuncia voluntaria.

Frente a las primas reclamadas de alimentación, prima de vivienda, prima de lejanía, prima de orden público o riesgo y prima de calor o de clima, y su consecuente efecto sobre los salarios y las prestaciones legales, debe señalarse que éstas no aparecen estipuladas para su reconocimiento y pago ni en el contrato de trabajo ni en el reglamento interno del Consorcio CCC Ituango, y que si bien aparece registro en el numeral segundo del contrato de trabajo del actor, solo es para hacer referencia a que “El Consorcio” y “El Trabajador” *“acuerdan expresamente que las prestaciones, servicios, primas de campo, primas de alimentación, primas de vivienda y demás bonificaciones o beneficios de carácter extralegal que eventualmente pague “El Consorcio”, no tendrán naturaleza o carácter de salario, para ningún efecto...”*, es decir, tienen el carácter de eventual y que no revisten carácter salarial.

Cabe anotar que los testigos traídos al proceso por la parte actora, señores Abad de Jesús Álzate Marín y Francisco Luis Londoño Rúa, tampoco dan cuenta que tales primas les hayan sido reconocidas a todo tipo de trabajadores, pues si bien el señor Álzate Marín refiere que visualizó una colilla

de pago con el pago de la prima de campo, no especifica a que tipo de trabajador correspondía, siendo tal aclaración necesaria por cuanto el testigo de la parte demandada, señor John Jairo Puerta Taborda, jefe de nómina de la accionada, refirió que tal prima solo era pagada al personal administrativo, en tanto a los trabajadores operativos se les reconocía la alimentación y el hospedaje en la misma obra y el transporte hasta la ciudad de Medellín.

Por tanto, al no tener derecho a las primas antes referidas, mucho menos podría tener derecho a que se consideraran salario y, consecuentemente, a que tuvieran capacidad de reajustar algunos pagos salariales y las prestaciones de ley. Resultando lo anterior incontrovertible, la indemnización consagra en el artículo 65 del CST no tiene vocación de prosperidad, pues no se advierte omisión alguna del empleador en el pago de los salarios y prestaciones sociales.

Sin más por considerar, habrá lugar a confirmar la sentencia venida en consulta. En esta instancia no se impondrán costas dada la manera en que se conoce del asunto.


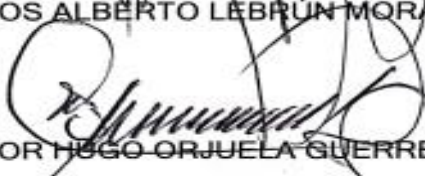

### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia materia de consulta, de fecha y procedencia conocidas.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 050010310502120210024201  
**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** WILSON ALBERTO ALZATE  
**Demandado:** CONINSA RAMON H S.A.  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 29/05/2023  
**Decisión:** CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 30/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario